Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Ref: 11001-4003-052-2019-00751-00

En esta instancia el Despacho resuelve el recurso de reposición que se formuló en contra del proveído del 30 de noviembre de 2021, mediante el cual se decidió no tramitar la demanda de reconvencción que propuso la demandada principal Clara Elizabeth Cano Umaña, a pesar de que subsanaron en tiempo y en debida forma las falencias que se le enrostraron en auto del 1 de octubre de 2021, previo al recuento de las siguientes,

Consideraciones

La recurrente indica con sustento en el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, el director del proceso hace una interpretación errada del Decreto 806 del 4 de junio de 2020 que se expidió con el fin de agilizar los procesos judiciales, flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y reglamentar el uso de las tecnologías en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica; al exigir la autenticación del correo electrónico del que se envía la subsanación exigida en auto del 1 de octubre de 2021, especialmente cuando el memorial que se radicó ante sus dependencias fue debidamente suscrito por la apoderada designada para la representación de la demandante en reconvencción Clara Elizabeth Cano Umaña.

Para resolver el conflicto el Juzgado estima útil precisar, delantadamente, que como le asiste razón a esta sede judicial en que el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 a través de la que se estableció el Código Disciplinario del Abogado, plantea que es un deber del abogado *“tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional”*.

Adicionalmente, en que en el inciso 5° del artículo 14 del Acuerdo PCSJA20-11556 de 2020 por medio del que el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos, amplió sus excepciones y se adoptó otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor, se insistió en este deber profesional al indicarse que *“los abogados litigantes inscritos en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura deberán registrar y/o actualizar su cuenta de correo electrónico, de conformidad con las directrices que emita el Consejo Superior a través de la Unidad de Registro Nacional de Abogados”*.

Y que la importancia de ese requisito se constata con lo reglado en el inciso 2° del artículo 5 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, en donde se planteó que no obstante que los poderes se podrán conferir por mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, porque se presumirán auténticos y que no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento, en estos deberá indicarse expresamente *“la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados”*.

No hay lugar a predicar que en el *sub examine* se esté trasgrediendo el derecho de defensa que es una de las principales garantías del debido proceso y que en palabras de la Corte Constitucional en sentencia T-544 de 2015 se ha entendido como la *“oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la otorga”*.

Y mucho menos del derecho a la administración de justicia que según la corporación en cita en sentencia T-799 de 2011 se conoce como la posibilidad *“reconocida a todas las personas*

de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley”.

Lo que en últimas quiere decir, que la exigencia en la que esta sede judicial funda su decisión de abstenerse de tramitar la reconvencción tiene pleno fundamento legal y fue ajustada a la conducta que el artículo 78 del C.G.P. le impone a esta funcionaria, en el entendido que en el numeral 14 de ese canon legal se plantea que son deberes del juez el dirigir el proceso, el velar por su rápida solución, el presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso, así como procurar la mayor economía procesal.

De allí que sea por lo brevemente narrado entonces, que el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Civil Municipal de Bogotá D.C., **DISPONGA:**

PRIMERO: MANTENER INCÓLUME el proveído del 30 de noviembre de 2021, por las razones expresadas en la parte considerativa del proveído.

SEGUNDO: NEGAR la apelación subsidiariamente propuesta, por no ser el evento estudiado uno de los escenarios que plantea el artículo 321 del C.G.P.

TERCERO: Una vez ejecutoriado el pronunciamiento de la referencia, secretaría ingrese el expediente al despacho para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE,

DIANA NICOLLE PALACIOS SANTOS

Juez

(2)

Firmado Por:

Diana Nicolle Palacios Santos

Juez Municipal

Juzgado Municipal

Civil 052

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Código de verificación: **6cfca2ce39ad0bbec272611a8d43f7ab979f9c9e408d0578d4e63b7763b615fb**

Documento generado en 09/03/2022 10:31:04 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>